

EL BINOMIO JUSTICIA TRANSICIONAL- DERECHO TRANSICIONAL. UN EXAMEN A PROPÓSITO DE ALGUNAS REFLEXIONES TEÓRICAS Y PRÁCTICAS RECIENTES*

JAVIER CHINCHÓN ÁLVAREZ**

1. A MODO DE INTRODUCCIÓN

El pasado 28 de abril se publicaba en el Diario El País una entrevista al presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Diego García Sayán. La frase escogida como titular de la misma era la que sigue: “La aplicación estricta de la justicia puede ser un impedimento para la paz” (Ximénez de Sandoval, 2013). De manera más detallada, el presidente de la Corte decía explicar qué se ha de entender por el concepto de Justicia Transicional, manifestándose en los siguientes términos:

Es un concepto que se ha ido construyendo en los últimos 10 o 15 años. No es justicia *light*, es un conjunto de principios y de valores. Sus elementos son, primero, la verdad. Conocer qué pasó. Se puede hacer a través de comisiones de la verdad, a través de sentencias judiciales, a través de confesiones de los perpetradores, como en Sudáfrica posapartheid. La segunda pieza es la reparación a las víctimas, que incorpora la reparación material, programas de salud, habitacionales, homenajes... Y el tercer elemento, justicia (Ximénez de Sandoval, 2013).

* El presente artículo se enmarca en el Proyecto de Investigación DER 2012-36142 (Universidad Carlos III de Madrid), financiado por el Ministerio de Economía y Competitividad de España.

** Profesor Ayudante Doctor de Derecho Internacional Público y Relaciones Internacionales, Universidad Complutense de Madrid.

Ciertamente, en el fondo de estas palabras parecen resonar posiciones más desarrolladas ya mantenidas por el Juez García Sayán, como por referir un ejemplo reciente, la expresada en su voto (nominalmente) concurrente en el *caso Masacres de El Mozote y lugares aledaño vs. El Salvador*¹, al que luego volveré. Con todo, tanto el titular reproducido de aquella entrevista como gran parte de sus términos generales ejemplifican un debate que en mi opinión no se ha limitado a los últimos 10 o 15 años, pero que de cualquier modo se ha solido resumir en las posturas de los denominados como idealistas frente a los realistas —o para los colegas anglosajones, *human righters* versus *peace makers*.

Así, y por citar una sola afirmación de otra autoridad como es Luis Moreno Ocampo, entonces Fiscal de la Corte Penal Internacional, frente a lo que apunta el presidente de la Corte Interamericana se podría responder con lo siguiente: “... the idea to sequence peace and justice (...) [p]eace first then justice. As a consequence there was neither peace nor justice” (Moreno Ocampo, 2009, 8). Dicho en otras palabras, muy recientes, las de la histórica sentencia del Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente en el proceso contra Ríos Montt y Rodríguez Sánchez: “creemos en realidad que para que exista paz (en Guatemala) debe existir previamente Justicia”². Pudiendo recordar en este punto que una experta como Abellán Honrubia ha llegado a calificar como un “crimen internacional” en sí mismo, lo que denominó como “denegación permanente de justicia” (Abellán, 1993, 197-198).

¹ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Masacres de El Mozote y lugares aledaño vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas*, 25.10.2012, Serie C: Resoluciones y Sentencias, N°. 252.

² Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente, Guatemala, sentencia C-01076-2011-0015 OF.2°, de 10 de mayo de 2013. En el momento de revisión de esta contribución no está aún disponible el texto final de la sentencia leída el mismo 10 de mayo de 2013. Puede accederse al audio de la misma en la siguiente dirección: <http://noticias.emisorasunidas.com/noticias/nacionales/audio-video-condenan-80-anos-carcel-rios-montt> (consultado el 12 de mayo de 2013). La cita reproducida es del archivo “cuarta parte de la sentencia”. Para una primera aproximación sobre este proceso, y sobre todo respecto a cómo se llegó hasta él, puede verse Bernabeu, 2013.

Ahora bien, excede del objeto y sin duda de las posibilidades de esta contribución adentrarme con la profundidad necesaria en esta discusión general, con lo que en lo que vendrá quiero centrarme en algo más específico. Esto es, nuestro punto de partida será la suerte de graduación que parece señalarse en la cita reproducida al inicio, según la cuál se podría concluir que existe una especie de prelación en la que lo primero sería la verdad, después la reparación y finalmente la justicia; siendo además que esta última presentaría una naturaleza *limitada*, puesto que aunque el mismo presidente de la Corte Interamericana se preguntaba si “la justicia [debía ser] absoluta (...) [y] procese *in extremis* a todos y cada uno de los perpetradores”, finalmente afirmaba que “en la medida en que haya reparación y verdad, [se] hace más digerible no la falta de justicia, sino una justicia con una selectividad que procese las cosas realistamente” (Ximénez de Sandoval, 2013).

2. EL BINOMIO JUSTICIA TRANSICIONAL-DERECHO TRANSICIONAL

A partir de lo señalado, una primera cuestión que quisiera al menos avanzar en forma de interrogante es la siguiente: ¿cuál es la base normativa que vendría a sostener la existencia de la suerte de orden de prelación identificado? Expresado en otros términos, dónde encontrar el sostén jurídico que hiciera posible matizar, como mínimo, lo que por citar un solo ejemplo se codificaba en el ya célebre Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad; a saber:

... la necesidad de adoptar (...) medidas nacionales e internacionales, para que, en interés de las víctimas de violaciones de los derechos humanos, se asegure *conjuntamente* el respeto efectivo del derecho a saber que entraña el derecho a la verdad, el derecho a la justicia y el derecho a obtener reparación, *sin los cuales* no puede haber recurso eficaz contra las consecuencias nefastas de la impunidad³.

De ser preciso, en este punto conviene aclarar que lo anterior se enmarca o refiere (también) a lo que sería propio a los procesos de “restablecimiento de la democracia y/o de la paz o de transición hacia

³ Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2005), Preámbulo. Cursivas añadidas.

ellas”⁴, por utilizar las propias palabras del Conjunto de principios. La cuestión de fondo, no obstante, es que a mi entender en la postura resumida del Presidente de la Corte Interamericana subyace una convicción que de manera más expresa podemos encontrar también en un ámbito más cercano como es la reciente experiencia española. Así, aunque es cierto que en el caso de España no ha habido muchos ejemplos en que se haya exteriorizado una posición completa respecto al particular que ahora nos ocupa, en la sentencia del Tribunal Supremo de febrero de 2012 en la Causa contra el Magistrado Baltasar Garzón sí se invocó y desarrolló de manera expresa el concepto de Justicia Transicional, en estos términos:

En el ámbito jurídico se ha denominado "derecho transicional" a aquella rama del ordenamiento jurídico cuyo objeto de análisis y estudio es la ordenación pacífica de los cambios de un régimen a otro, tratando de superar las heridas existentes en la sociedad como resultado de las violaciones a derechos humanos, avanzar en los procesos de reconciliación y garantizar los derechos de las víctimas y de la sociedad en general a la verdad, a la justicia y a la reparación⁵.

Sin entrar en los detalles de la experiencia española⁶, pues para ello ya hay previsto otro Panel con grandes especialistas, aunque aquí no se indica o apunta la existencia de ninguna prelación entre verdad, justicia y reparación, lo reproducido pone ya directamente sobre la mesa la afirmación de la existencia de algo llamado “derecho transicional”, como una suerte de subsector concreto, o rama específica del ordenamiento jurídico, cuyos perfiles parecieran ser diferentes entonces a lo que podría calificarse como régimen jurídico general. Por más señalar, y sin desdecirme, anotar al menos que en la experiencia española también se ha afirmado expresamente que tal (sub)sector del ordenamiento jurídico opera sólo durante un proceso de transición, con lo que acabado éste, su vigencia desaparece⁷. Posición general cuyo sustento jurídico

⁴ *Ibid*, p. 3, 6 y 12.

⁵ Tribunal Supremo, sentencia N° 101/2012, de 27 de febrero de 2012, Fundamento de Derecho Quinto.

⁶ Para el lector interesado en mis impresiones al respecto, puede verse Chinchón Álvarez, J. (2012), que incluye también referencias a algunos otros trabajos anteriores.

⁷ En concreto: “Tampoco quiero entrar en la discusión, que nos llevaría muy largo, de no perder de vista (...) lo que se ha venido en llamar la justicia

para mí no sólo es ignoto, sino que contradice directamente principios fundamentales del Derecho internacional como es el de identidad o continuidad del Estado⁸.

De cualquier modo, con lo recogido queda expuesta la potencial existencia de lo siguiente: De un lado, tendríamos a lo que se denominado como Justicia Transicional o Justicia de Transición, en terminología de las Naciones Unidas⁹, cuyo objeto de trabajo y análisis podría resumirse en la búsqueda de respuestas a estas cuatro preguntas fundamentales: 1) si hay que recordar, procesar y enfrentar el pasado a partir de la transición (simple o doble), o es mejor intentar *olvidar* y pensar sólo en el *futuro*; si se aborda ese pasado: 2) cuándo ha de hacerse; 3) quién debe hacerlo; y 4) cómo ha de hacerse. A pesar de que con acierto se ha señalado que ya parece fuera de discusión que “...la definición de lo que un gobierno *normal* debe hacer es encarar el pasado y promover medidas ligadas al esclarecimiento de la verdad, la justicia y el reconocimiento” (Jenin, 2010, 50), la cuestión es que del otro lado, parece afirmarse la existencia de un “derecho transicional” que en lo jurídico pudiera pensarse que vendría responder a estos interrogantes con una suerte de respuestas específicas, en el sentido de distintas a lo general.

transicional, es decir, un conjunto normativo de carácter internacional que pretende asegurar, por supuesto, el respeto a los derechos humanos, bien en la resolución de los conflictos, bien en los procesos de transición de regímenes que han usado de manera sistemática y arbitraria la violencia a regímenes democráticos, para fortalecer de este modo las bases del nuevo Estado de derecho; a eso se refieren estas normas. Desde ese punto de vista, no hay paralelismo con una situación como la de nuestro país, que ha hecho ejemplarmente y con éxito su transición hace 30 años...”. *Vid.* Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Año 2006, VIII Legislatura, Número 222, Sesión plenaria núm. 206, celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2006, p. 11270.

⁸ Como es sabido, a tenor de este principio, destilado fundamental de los principios de seguridad jurídica internacional, así como de la propia formulación de los definidos como principios estructurales del Derecho internacional, el Estado continúa siendo el mismo, a los efectos del ordenamiento jurídico internacional, cualquiera que sea el cambio o cambios ocurridos en su organización interna. Así, toda alteración que pueda acaecer en la organización política de un Estado, siempre y cuando no afecte a la condición internacional de éste, es irrelevante en lo que se refiere al cumplimiento de sus obligaciones internacionales frente a terceros.

⁹ En este sentido, Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, 2004.

Ahora bien, más allá de la problemática general propia a toda transición, propondría que adoptemos ahora una aproximación más cercana a lo que queremos discutir en este foro; especialmente del término o concepto “pasado”. En este sentido, se podría optar por aquella que ofrecía un reputada experta como la profesora Teitel; es decir: “[t]ransitional justice can be defined as the conception of justice associated with periods of political change, characterized by legal responses to confront the wrongdoings of repressive predecessor regimes” (Teitel, 2003, 69). No obstante, en mi opinión resulta aun más ajustada a los efectos que nos ocupan la definición ofrecida por otras especialistas como la profesora Roht-Arriaza; para quien este concepto ha de entenderse como “a set of practices, mechanisms and concerns that arise following a period of conflict, civil strife or repression, and that are aimed directly at confronting and dealing with *past violations of human rights and humanitarian law*”¹⁰ (Roht-Arriaza, 2006, 2). Dejando al margen el debate sobre si esta consideración pudiera ser demasiado “legalista” atendiendo a la totalidad de problemas concurrentes en una transición¹¹, tendríamos entonces que ese supuesto “derecho transicional” configura una suerte de subsistema jurídico propio o diferente respecto a esas *violations of human rights and humanitarian law*. Un subsistema, por volver al comienzo, que quizá permitiera afirmar que en estos casos lo primero es la verdad, luego la reparación y finalmente la justicia en el grado o medida que sea posible.

Dando un paso más, podríamos ejemplificar lo anterior remitiéndonos a aquello que la Asamblea General de las Naciones Unidas, en su primer período de sesiones, ya confirmó por unanimidad, es decir, los conocidos como “Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto del Tribunal de Nuremberg y las sentencias de dicho Tribunal”¹². Documento al que seguiría unos años después, ya de la mano de la Comisión de Derecho Internacional, los ya también clásicos “Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg”¹³. El primero de estos Principios, no sólo reiterado, sino expresamente citado como base y sustento de otros documentos como el artículo 1 del texto inicial del

¹⁰ Cursiva añadida.

¹¹ En este sentido, Mcevoy, 2007.

¹² Asamblea General de las Naciones Unidas, 1946.

¹³ Comisión de Derecho internacional, 1950.

Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad de 1951¹⁴, el mismo artículo del Proyecto aprobado en 1954¹⁵, o el artículo 2 del definitivo Proyecto de 1996¹⁶, como es sabido recogió que “toda persona que cometa un acto que constituya delito de derecho internacional es responsable de él y está sujeta a sanción”. La cuestión es entonces si a ello habría que agregar a continuación que esto no es o no puede ser así -o no exactamente así- jurídicamente si nos

¹⁴ “*Article 1.* Offences against the peace and security of mankind, as defined in this Code, are crimes under international law, for which the responsible individuals shall be punishable.” This article is based upon the principle of individual responsibility for crimes under international law. This principle is recognized by the Charter and judgment of the Nürnberg Tribunal, and in the Commission's formulation of the Nürnberg principles it is stated as follows: “Any person who commits an act which constitutes a crime under international law is responsible therefore and liable to punishment.” *Vid. Yearbook of the International Law Commission* 1951, vol. II, pp. 134-135.

¹⁵ “*Article 1.* Offences against the peace and security of mankind, as defined in this Code, are crimes under international law, for which the responsible individuals shall be punished. *Comment.* The Commission decided to replace the words “shall be punishable” in the previous text by the words “shall be punished” in order to emphasize the obligation to punish the perpetrators of international crimes. Since the question of establishing an international criminal court is under consideration by the General Assembly, the Commission did not specify whether persons accused of crimes under international law should be tried by national courts or by an international tribunal”. *Vid. Yearbook of the International Law Commission* 1954, vol. II, p.150

¹⁶ “*Artículo 2.* Responsabilidad individual. 1. Un crimen contra la paz y la seguridad de la humanidad comportará responsabilidad individual. (...) *Comentario.* 1) El principio de la responsabilidad individual por los crímenes de derecho internacional quedó claramente establecido en Nuremberg. El estatuto del Tribunal de Nuremberg estableció el procesamiento y castigo de las personas que hubieran cometido crímenes contra la paz, crímenes de guerra o crímenes de lesa humanidad. El Tribunal de Nuremberg confirmó la aplicabilidad directa del derecho penal internacional respecto de la responsabilidad y el castigo de los individuos por violaciones de ese derecho: «Se ha alegado que el derecho internacional se ocupa de las acciones de Estados soberanos y no prevé el castigo de los individuos [...] En opinión del Tribunal, debe rechazarse tal alegación. Hace mucho tiempo que se ha reconocido que el derecho internacional impone derechos y obligaciones a los individuos así como a los Estados». El Tribunal de Nuremberg llegó también a la conclusión de que «puede castigarse a los individuos por violaciones del derecho internacional».» *Vid. Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, segunda parte, 1996, p. 21.

encontrásemos en un contexto transicional. A ello cabría añadir, desde luego, si de igual manera ocurriría con todos los restantes Principios, sin necesidad de ir más lejos; siendo, en fin, la duda principal e inmediata: ¿cuál es la base jurídica que permite afirmarse esto? En otras palabras: ¿cuáles son los fundamentos y/o las normas de ese supuesto “derecho transicional” que presentan diferencias frente a la normativa general ante cualquier crimen de derecho internacional, por hablar de responsabilidades individuales, o frente a graves violaciones a los derechos humanos, en el caso de la responsabilidad del Estado?¹⁷

Si volvemos al inicio, el presidente de la Corte Interamericana exponía al respecto algunas reflexiones y ofrecía algunos argumentos concretos en su ya avanzado voto particular en el *caso Masacres de El Mozote y lugares aledaño*. De entre todos ellos, valga recoger lo siguiente:

La solución negociada de un conflicto armado interno abre varios interrogantes sobre el *juicio de ponderación de estos derechos* [en lo que ahora interesa, verdad, reparación y justicia], en la legítima discusión sobre la necesidad de cerrar el conflicto y poner fin a futuras graves violaciones de los derechos humanos. Los Estados tienen el deber jurídico de atender los derechos de las víctimas, y *con la misma intensidad*, la obligación de prevenir nuevos hechos de violencia y alcanzar la paz en un conflicto armado por los medios que estén a su alcance. La paz como producto de una negociación se ofrece como una alternativa moral y políticamente superior a la paz como producto del aniquilamiento del contrario. Por ello, *el derecho internacional de los derechos humanos*

¹⁷ Con independencia de las consabidas diferencias entre ambas dimensiones o haces de responsabilidad, como bien señaló el Juez Cançado Trindade: “La responsabilidad internacional del Estado por violaciones de los derechos humanos internacionalmente consagrados, -incluidas las configuradas mediante la expedición y aplicación de leyes de autoamnistía- y la responsabilidad penal individual de agentes perpetradores de violaciones graves de los derechos humanos y del Derecho Internacional Humanitario, son dos facetas de la misma medalla, en la lucha contra las atrocidades, la impunidad y la injusticia”. *Vid.* Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade en el *caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros v. Perú)*, 14.03.2001, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 75, párr. 13.

*debe considerar a la paz como un derecho y al Estado como obligado a alcanzarla*¹⁸.

Es interesante hacer notar que el núcleo de los razonamientos del Juez García Sayán se dirigía a tratar de matizar, en cierto modo discutir, la general valoración jurídico-internacional de las leyes de amnistía mantenida precisamente por la Corte Interamericana, en una línea que de algún modo recuerda a posiciones como aquélla de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de hace camino de tres decenios¹⁹. No me detendré en este particular, pues será abordado en otros Paneles al hilo de la sentencia del *caso Gelman*²⁰; lo que quisiera destacar en este punto es la invocación de la paz como potencial elemento clave para (poder) ponderar los derechos -y obligaciones internacionales- apuntados.

Ciertamente, con carácter general lo anterior podría llevarnos a ese amplio debate en el que como ya dije al comienzo es imposible entrar ahora, pero es la más completa referencia a “la paz como un derecho” lo que nos permite poner sobre la mesa algún elemento de juicio adicional.

¹⁸ Voto concurrente del Juez Diego García Sayán en el *caso Masacres de El Mozote y lugares aledaño vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas*, 25.10.2012, Serie C: Resoluciones y Sentencias, N°. 252, párr. 37. Cursivas añadidas.

¹⁹ En concreto: “... un difícil problema que han debido afrontar las recientes democracias es el de la investigación de las anteriores violaciones de derechos humanos y el de la eventual sanción a los responsables de tales violaciones. La Comisión reconoce que ésta es una materia sensible y extremadamente delicada, en la cual poco es el aporte que ella –así como cualquier otro órgano internacional– puede efectuar. Se trata, por lo tanto, de un asunto cuya respuesta debe emanar de los propios sectores nacionales afectados y donde la urgencia de una reconciliación nacional y de una pacificación social deben armonizarse con las ineludibles exigencias del conocimiento de la verdad y la justicia. Considera la Comisión, por lo tanto, que sólo los órganos democráticos apropiados –usualmente el Parlamento– tras un debate con la participación de todos los sectores representativos, son los únicos llamados a determinar la procedencia de una amnistía o la extensión de ésta, sin que, por otra parte, puedan tener validez jurídica las amnistías decretadas previamente por los propios responsables de las violaciones”. *Vid.* Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1985-1986), *Informe Anual*, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.68 doc. 8 rev. 1, Capítulo V, párrs. 10-11.

²⁰ Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones*, 24.02.2011, Serie C: Resoluciones y Sentencias, N°. 221.

Así, podría citarse aquí uno de los recientes frutos del más amplio y avanzado proceso de codificación privada en marcha respecto precisamente al “derecho humano a la paz”; esto es, la conocida como Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, de 10 de diciembre de 2010²¹, en la que se afirma que:

²¹ En la misma se incorporan las declaraciones, conclusiones y recomendaciones formuladas en las conferencias y reuniones regionales de personas expertas sobre el derecho humano a la paz que ya se han celebrado en Ginebra (Conferencia Mundial de ONG para la Reforma de las Instituciones Internacionales, noviembre de 2006); México (diciembre de 2006); Bogotá, Barcelona y Addis Abeba (Etiopía) (marzo de 2007); Caracas y Santo Domingo (abril de 2007); Morelia (México), Bogotá, Oviedo y Santa Fe (Nuevo México, Estados Unidos) (mayo de 2007); Washington, Nairobi (Kenya) y Ginebra (junio de 2007); Feldkirch (Austria) (agosto de 2007); Ginebra (11, 12 y 21 de septiembre de 2007), Luarca (Asturias) (28 de septiembre de 2007), Madrid (23 de octubre de 2007), Monterrey (1º de noviembre de 2007); México DF, Ginebra, Las Palmas de Gran Canaria, Zaragoza y Navia (Asturias) (diciembre de 2007); con ocasión del período de sesiones de la Comisión sobre la Condición Jurídica y Social de la Mujer de las NU en Nueva York (febrero de 2008); Parlamento de Cataluña (Barcelona), Ginebra, Dakar, Madrid, Valencia (abril de 2008); Roma y Gwangju (República de Corea) (mayo de 2008); Ginebra y Bilbao (junio de 2008); Ginebra y Cartagena (julio de 2008); París, Toledo, Ginebra, Zaragoza y Montevideo (septiembre de 2008); Oviedo, Alcalá, Turín, Nueva York y Parlamento Vasco (Vitoria) (octubre de 2008); La Plata y Buenos Aires (Argentina), y Bosco Marengo (Italia) (noviembre de 2008); Luxemburgo, Ginebra y Barcelona (diciembre de 2008); Ginebra y Barcelona (enero de 2009); Yaundé, Camerún (febrero de 2009); Ginebra y Nueva York (marzo de 2009); Johannesburgo, Sevilla, Madrid, Santiago de Compostela y Bangkok (abril 2009); Trevi (Italia), México y Sevilla (mayo de 2009); Ginebra (junio de 2009); Ciudad de México y Morelia (julio de 2009); San Sebastián (agosto de 2009); Ginebra y Valdés (Asturias) (septiembre de 2009); Caso y Cangas de Onís (Asturias), Alcalá de Henares y Sarajevo (octubre de 2009); Las Palmas de Gran Canaria, Universidades de Berkeley (EE.UU.) y Ginebra (noviembre de 2009); Alejandría (Egipto) y Ginebra (diciembre de 2009); La Habana (Cuba) y Ginebra (enero de 2010); Ginebra y Bilbao (febrero de 2010); Ginebra y Nueva York (marzo de 2010); Luarca (Asturias), México D.F. y municipio de Telde, Gran Canaria (abril de 2010); Nueva York, Congreso de los Diputados (Madrid), Bilbao y Barcelona (mayo de 2010); Barcelona, Ginebra, Kampala y Santiago de Compostela (junio de 2010); Las Palmas de Gran Canaria (julio de 2010); Ginebra, Buenos Aires y Montevideo (agosto de 2010); Toledo, Ginebra, Nueva York y Barcelona (septiembre de 2010); Chipre, Oviedo, Alcalá de Henares y Lanzarote (octubre de 2010); Soria, Bilbao, Berriz

... la paz debe estar basada en la justicia y que, por tanto, todas las víctimas sin discriminación tienen derecho a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad, así como a una reparación efectiva de conformidad con lo dispuesto en la resolución 60/147 de la Asamblea General, de 16 de diciembre de 2005, que aprueba los *Principios y directrices básicos sobre el derecho de las víctimas de violaciones manifiestas de las normas internacionales de derechos humanos y de violaciones graves del derecho internacional humanitario a interponer recursos y obtener reparaciones*, contribuyendo así a la reconciliación y al establecimiento de una paz duradera;

En mayor detalle, se recoge en su artículo 11 lo que es necesario reproducir en su integridad:

Derechos de las víctimas.

1.- Todas las víctimas de violaciones de los derechos humanos tienen derecho, sin discriminación, a su reconocimiento como tales, a la justicia, a la verdad, y a una reparación efectiva que les proteja ante

(País Vasco) y Caracas (noviembre de 2010). Así mismo, su contenido tiene especial consideración hacia la *Declaración de Luarca sobre el Derecho Humano a la Paz* (30 de octubre de 2006), la *Declaración de Bilbao sobre el Derecho Humano a la Paz* (24 de febrero de 2010), así como la *Declaración de Barcelona sobre el Derecho Humano a la Paz* (2 de junio de 2010) aprobadas por tres Comités de redacción diferentes compuestos de personas expertas independientes; así como las Declaraciones regionales sobre el derecho humano a la paz formuladas por personas expertas de la sociedad civil internacional en La Plata (Argentina) (noviembre de 2008), Yaundé (Camerún) (febrero de 2009), Bangkok (Tailandia) (abril de 2009), Johannesburgo (Sudáfrica) (abril de 2009), Sarajevo (Bosnia y Herzegovina) (octubre de 2009), Alejandría (Egipto) (diciembre de 2009), y La Habana (Cuba) (enero de 2010). También en esta declaración se destaca el informe sobre los resultados del taller de personas expertas sobre el derecho de los pueblos a la paz (Ginebra, 15 y 16 de diciembre de 2009); la resolución 14/3, de 17 de junio de 2010, por la que el Consejo de Derechos Humanos pidió al Comité Asesor que preparase un proyecto de declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz; y la recomendación 5/2 del Comité Asesor, de 6 de agosto de 2010, por la que estableció un grupo de redacción de cuatro miembros. En lo más reciente, véase “Oswiecim Declaration on the Human Right to Peace”, 16 de Mayo de 2013. Sobre toda esta cuestión, con carácter general pueden verse Villán Durán y Faleh Pérez (2010), Villán Durán y Faleh Pérez (2012). Para una información documental detallada, véase <http://www.aedidh.org/>.

violaciones de los derechos humanos, particularmente del derecho humano a la paz.

2.- Toda persona tiene el derecho imprescriptible e irrenunciable a obtener justicia ante violaciones de sus derechos humanos, lo que comprenderá la investigación y determinación de los hechos, así como la identificación y sanción a los responsables.

3.- Las víctimas de violaciones de los derechos humanos, sus familiares y la sociedad en general tienen el derecho imprescriptible de conocer la verdad.

4.- Toda víctima de una violación de derechos humanos tiene derecho, de conformidad con el derecho internacional de los derechos humanos, a que se restablezcan sus derechos conculcados; a obtener una reparación integral y efectiva, incluido el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a garantías de no repetición. Estos remedios no serán obstáculo para recurrir a tribunales populares o de conciencia y a instituciones, métodos, tradiciones o costumbres locales de resolución pacífica de conflictos, que sean admitidos por la víctima como medios aceptables de reparación.

Por su parte, podría referirse aquí también el artículo 11.1 del más reciente borrador de la denominada como “Declaración sobre el derecho de los pueblos a la paz”, adoptado ya en el seno de las Naciones Unidas de la mano del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, donde puede leerse lo que sigue:

Artículo 11. Derechos de las víctimas y los grupos vulnerables.

1. Toda víctima de una violación de los derechos humanos tiene, conforme a las normas internacionales de derechos humanos, un derecho imprescriptible a conocer la verdad y a que se restablezcan los derechos conculcados; a que se investiguen los hechos y se identifique y castigue a los culpables; a obtener una reparación integral y efectiva, lo que incluye el derecho a rehabilitación e indemnización; a medidas de satisfacción o reparación simbólica; y a que se garantice que esos actos no se repetirán²².

²² Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012, Anexo.

Así las cosas, que la “paz” o el “derecho a la paz” pudiera ser el principio fundamental que articulase al “derecho transicional” como una rama del ordenamiento jurídico singular, propio o diferente, respecto al régimen general frente a graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de derecho internacional, *ponderando* en suma la vigencia o pertinencia de los derechos ya señalados, se presenta como una posibilidad abierta y directamente discutible, cuando menos. Por más decir, lo que parece extraerse de los documentos citados es la determinación de consignar precisa y singularmente que la “paz” no puede superponerse a derechos “imprescriptibles”, “irrenunciables”, de las víctimas de graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de derecho internacional.

Del otro lado, es necesario señalar que aunque se ha afirmado que “the quality of justice we strive to achieve through [Transitional Justice] is no different from the ideal of justice to be pursued in ‘normal’ times” (Méndez, 2009, 157; en sentido parcialmente similar, Gross, 2004, Posner y Vermeule, 2004), el mismo concepto de “justicia”, o más en concreto, del “interés de la justicia” también se ha venido considerando como (otra) potencial singularidad propia al “derecho transicional”. A este respecto, podría mencionarse inicialmente que, por ejemplo, en el último documento citado *supra* se recuerda entre otras cuestiones que “a fin de reforzar el estado de derecho internacional, todos los Estados se esforzarán por (...) enjuiciar los crímenes de genocidio, de lesa humanidad, de guerra y de agresión” (Asamblea General de las Naciones Unidas, 2012, Anexo, artículo 2.9); pero en lo concreto, también en el mismo debate que siguió a nuestro Panel se puso sobre la mesa un elemento específico como es el literal del artículo 53.1 c) del Estatuto de la Corte Penal Internacional²³, esto es, que:

El Fiscal, después de evaluar la información de que disponga, iniciará una investigación a menos que determine que no existe fundamento razonable para proceder a ella con arreglo al presente Estatuto. Al decidir si ha de iniciar una investigación, el Fiscal tendrá en cuenta si: (...) c) Existen razones sustanciales para creer que, aun teniendo en cuenta la gravedad del crimen y los intereses de las víctimas, una investigación no redundaría en interés de la justicia.

²³ Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, en *BOE* de 27 de mayo de 2002.

Excede de las posibilidades de esta contribución adentrarnos en el sentido y contenido de esta, sin duda, refractaria disposición; sobre la que sí apuntaría al menos que siempre me parecieron muy acertados el tenor e interrogantes que se plantearon McDonald y Roelof: “[t]he question is, what is meant by justice here, what serves the interest of justice. And for whom is justice served? The victims? The state affected? International lawyers? The world?” (McDonald y Roelof, 2003, 5-6; véase también el interesante enfoque de Newman, 2005, así como Djukic, 2007). En todo caso, la clave en este punto es que una cosa es lo que los Estados hayan configurado como elementos de la competencia un órgano internacional u otro, en este caso de la Corte Penal Internacional, y otra muy diferente que ello responda o recoja una especie de norma, ya general, ya trasladable a lo genérico. Por expresarlo con solo un ejemplo, valga acudir al Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio²⁴, cuyo artículo I dispone que “las Partes contratantes confirman que el genocidio, ya sea cometido en tiempo de paz o en tiempo de guerra, es un delito de derecho internacional que ellas se comprometen a prevenir y a sancionar”, de tal suerte que “las personas acusadas de genocidio serán juzgadas (cuando menos) por un tribunal competente del Estado en cuyo territorio el acto fue cometido”²⁵, y en su caso “castigadas, ya se trate de gobernantes, funcionarios o particulares”²⁶; resultando que en caso alguno se indica en ninguno de sus restantes artículos que ello no deberá ser así cuando se estime que hacerlo “no redundaría en interés de la justicia”. Lo señalado es igualmente aplicable a todas las restantes normas (convencionales sin lugar a duda alguna) propias al Derecho internacional penal; pudiendo recordar en este orden de ideas que como ha señalado Lauren, el desarrollo del mismo puede examinarse, comprenderse y evaluarse como el lento, ciertamente tortuoso pero constante avance para acabar con la impunidad; en el entendimiento de que “the culture of impunity is an appropriate description for most of the entire experience of human history” (Lauren, 2004, 15).

En este sentido, la cuestión es que a mi entender lo que realmente ha ocurrido desde hace bastantes años ha sido, precisamente, un esfuerzo

²⁴ Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en Nueva York el 9 de diciembre de 1948, en *BOE* de 8 de febrero de 1969.

²⁵ Artículo VI.

²⁶ Artículo IV.

y trabajo constantes para afirmar que las obligaciones internacionales propias a todo crimen de derecho internacional y/o grave violación a los derechos humanos son *también* exigibles en un proceso de transición²⁷; no que son o deben ser *diferentes*, bajo una invocación u otra (la paz, el interés de la justicia, la siempre ambivalente “reconciliación”, etc.), en estos casos. En otras palabras, las del miembro de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Felipe González Morales: “[t]he treatment of grave violations of human rights has experienced a notable evolution the last 15 years (...). This development has gone in the direction of establishing in a peremptory manner a series of state obligations in relation to the types of abuses in question, in opposition to the criterion that prevailed before that and according to which the democratic states possessed a wide discretion on these matters” (González, 2012, 55).

Con lo anterior no quiero decir que los contextos propios a la Justicia Transicional no tengan, por supuesto, diferencias fácticas muy importantes respecto a una situación que pudiéramos calificar de estándar, lo que quiero poner sobre la mesa de debate es que a mi entender no existe, al menos a la fecha, ningún régimen jurídico propio a ellos, como tal, ya establecido y que podamos calificar como “derecho transicional”; excluyendo lo que sería propio a lo que generalmente se ha calificado como “garantías de no repetición”, por razones obvias²⁸.

Cuestión distinta, muy diferente de hecho, es sin duda la necesidad de interpretar las obligaciones internacionales generales frente a crímenes de derecho internacional y/o graves violaciones a los derechos humanos en atención a las concretas circunstancias (transicionales) que fueren; si bien, en mi opinión el elemento realmente capital en este punto no es tanto el proceso de transición en marcha, sino generalmente lo relativo al (muy elevado) número de víctimas y responsables de tales

²⁷ Sobre algunos de los motivos que explicarían este hecho, narrados en primera persona, Zalaquett 1991, en especial 93-94. Para más datos, Chinchón, 2011. Para una visión distinta en este punto, y de especial interés por lo diferente de los planteamientos y aproximación a este problema, Forcada, 2011. Sobre las medidas adoptadas en múltiples experiencias transicionales, puede encontrarse una visión comparativa actualizada, en Olsen, Paine y Reiter 2010.

²⁸ Al respecto, resulta muy interesante la perspectiva de los trabajos incluidos en Oré Aguilar y Gómez Isa, 2011.

hechos. Desde mi punto de vista pues, vengo defendiendo desde hace tiempo que la atención ha de dirigirse a tomar en consideración el clásico y fundamental principio del “efecto útil” de las normas internacionales; en el sentido de que si existen varias interpretaciones posibles, de entre todas ellas habrá de escogerse aquella que en el momento considerado permita su aplicación específica, que pueda tener algún efecto; que evite, en fin, la consideración de las obligaciones internacionales como deberes absolutos, que en determinados casos puedan llevar a situaciones de imposibilidad igualmente absoluta; pues como ya dejará escrito Verdross: “international duties must not be taken so far to result in self-destruction”²⁹. Lo que ocurre es que como es sabido, el límite a este principio clave es que esa interpretación en caso alguno puede llevar a violentar la letra y el espíritu de la norma en cuestión; ni tampoco cabe desconocer otros criterios rectores claramente establecidos en lo que aquí ocupa, como el principio *pro homine* inherente al Derecho internacional de los derechos humanos. De tal suerte que ciertamente, el margen interpretativo frente a los más graves crímenes de derecho internacional y/o graves violaciones a los derechos humanos es, en fin, bastante limitado.

3. A MODO DE CONCLUSIÓN

Si existiera algo llamado “derecho transicional” en relación a los crímenes del pasado, entendiendo por ello las graves violaciones a los derechos humanos y/o crímenes de derecho internacional, en mi opinión su aliento a la fecha hay que situarlo en destacar, recordar o aclarar, úsese el verbo que se prefiera, que también en contextos transicionales, en el ámbito propio a la Justicia Transicional, las obligaciones internacionales generales frente a ellos ni se esfuman, ni se difuminan, ni quedan congeladas; sino que son igualmente vigentes y vinculantes, debiendo eso sí interpretarse adecuadamente. Siendo preciso no olvidar que a mi entender, tanto lo propio al Derecho internacional penal como lo relativo al Derecho internacional de los derechos humanos están concebidos bajo la presunción de que los comportamientos en ellos prohibidos o sancionados no son la pauta general, sino que tienen (deberían tener) una naturaleza marcadamente excepcional.

²⁹ Verdross, 1937, 189, citado en Orentlincher, 1995, 407.

Si lo anterior estuviera ya suficientemente claro, cosa que personalmente no afirmarí, quizás es el momento de seguir trabajando para tratar de alcanzar ahora el consenso necesario para determinar un régimen jurídico concreto y singular aplicable a las transiciones precedidas de graves y masivas violaciones a los derechos humanos. Labor que yo veo complejísima, pero cuya pertinencia o posibilidades dejo sobre la mesa como inmediato objeto del siempre necesario y enriquecedor debate y discusión.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Abellán Honrubia, V. (1993), “Impunidad de violaciones de los derechos humanos fundamentales en América Latina: Aspectos jurídicos internacionales”. En VV.AA., *Jornadas iberoamericanas de la Asociación Española de Profesores de Derecho Internacional y Relaciones internacionales. La Escuela de Salamanca y el Derecho Internacional en América. Del pasado al futuro*. Salamanca: Universidad de Salamanca.
- Chinchón Álvarez, J. (2011), “Derecho internacional y “transformaciones del Estado”: Del desuso, uso y abuso del ordenamiento jurídico internacional cuando de ciertas “transformaciones que afectan a la forma de gobierno” se trata”. En Soroeta Licerias, J. (ed.), *La eficacia del Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Cursos de Derechos Humanos de Donostia-San Sebastián. Volumen XI*. Bilbao: Servicio Editorial de la Universidad del País Vasco.
- Chinchón Álvarez, J. (2012), *El tratamiento judicial de los crímenes de la Guerra Civil y el franquismo en España. Una visión de conjunto desde el Derecho internacional*. Bilbao: Ed. Universidad de Deusto.
- Djukic, D. (2007), “Transitional Justice and the ICC –“in the interest of justice”?, *International Review of the Red Cross*, 89-867, 691-718.
- Forcada Barona, I. (2011), *Derecho Internacional y Justicia Transicional. Cuando el Derecho se convierte en religión*. Navarra: Civitas-Aranzadi.
- González Morales, F. (2012), “The progressive development of the international law of transitional justice. The role of the Inter-American system”. En Almqvist, J., y Espósito, C. (eds.), *The Role of Courts in Transitional Justice. Voices from Latin America and Spain*. Oxon-Nueva York: Routledge.

- Gross, A. M. (2004), "The Constitution, Reconciliation, and Transitional Justice. Lessons from South Africa and Israel", *Stanford Journal of International Law*, 40-1, 47-104.
- Jenin, E. (2010), "Las memorias y su historia: El pasado reciente en el presente del Cono Sur". En Babiano, José (ed.), *Represión, derechos humanos, memoria y archivos: Una perspectiva latinoamericana*. Madrid: Ediciones GPS.
- Lauren, P. G. (2004), "From impunity to accountability: Forces of transformation and the changing international human right context". En Thakur, R. y Malcontent, P. (eds.), *From Sovereign Impunity to International Accountability: The search for Justice in a World of States*. Nueva York: United Nations University Press.
- Mcevoy, K. (2007), "Beyond Legalism: Towards a Thicker Understanding of Transitional Justice", *Journal of Law and Society*, 34-4, 411-440.
- Méndez, J. (2009), "Editorial Note", *International Journal of Transitional Justice*, 3-2, 157-162.
- Newman, G. D. (2005), "The Rome Statute, Some Reservations Concerning Amnesties, and A Distributive Problem", *American University International Law Review*, 20-2, 293-357.
- Olsen, T. D., Paine, L. A. y Reiter, A. G. (2010), *Transitional Justice in Balance: Comparing Processes, Weighing Efficacy*. Washington: United States Institute of Peace.
- Oré Aguilar, G., y Gómez Isa, F. (eds.) (2011), *Rethinking Transitions. Equality and Social Justice in Societies Emerging from Conflict*. Cambridge-Antwerp-Portland: Intersentia.
- Orentlicher, D. F. (1995), "Settling accounts: The duty to prosecute human rights violations of a prior regime". En Kritz, N. J. (ed.), *Transitional Justice: How Emerging Democracies Reckon with Former Regimes*, vol. I. Washington: United States Institute for Peace Press.
- Posner, E. A. y Vermeule, A. (2004), "Transitional Justice as Ordinary Justice", *Public Law and Legal Theory Working Paper*, 40, 1-50.
- Roht-Arriaza, N. (2006), "The New Landscape of Transitional Justice". En Roht-Arriaza, N. y Mariezcurrena, J. (eds.), *Transitional Justice in the*

Twenty-First Century. Beyond Truth versus Justice. Nueva York: Cambridge University Press.

Teitel, R. G. (2003), “Transitional Justice Genealogy”, *Harvard Human Rights Journal*, 16, 69-94.

Verdross, A. (1937), *Völkerrecht*. Berlin: Springer.

Villán Durán, C. y Faleh Pérez, C. (2012), “El liderazgo de la sociedad civil en la codificación internacional del derecho humano a la paz”. En Villán Durán, C. y Faleh Pérez, C. (eds.), *Paz, migraciones y libre determinación de los pueblos*. Lúarca: Asociación Española para el Derecho Internacional de los Derechos Humanos.

Villán Durán, C. y Faleh Pérez, C. (2010) (dirs), *Estudios sobre el derecho humano a la paz*. Madrid: Los Libros de la Catarata.

Zalaquett, J. (1991), “Derechos Humanos y limitaciones políticas en las transiciones democráticas del Cono Sur”, *Revista del Instituto Interamericano de Derechos Humanos*, 14, 91-136.

Artículos en periódicos

Ximénez de Sandoval, P. (2013, 28 de abril), “La aplicación estricta de la justicia puede ser un impedimento para la paz”, *El País*, disponible en http://internacional.elpais.com/internacional/2013/04/28/actualidad/1367174156_693511.html (consultado el 29 de abril de 2013).

Recursos digitales

Bernabeu, A. (2013), “El día en que se va a juzgar a Efraín Ríos Montt”, 19 de marzo de 2013, *Alrevesyalderecho*, <http://alrevesyalderecho.infolibre.es/?p=348>, (consultado el 11 de mayo de 2013).

Mcdonald, A. y Roelof, H. (2003), “Prosecutorial Discretion – Some Thoughts on ‘Objectifying’ the Exercise of Prosecutorial Discretion by the Prosecutor of the ICC”, Expert consultation process on general issues relevant to the ICC Office of the Prosecutor, 15 de abril de 2003, www.icc-cpi.int/iccdocs/asp_docs/library/organs/otp/mcdonald_haveman.pdf, (consultado el 11 de mayo de 2013).

Moreno Ocampo, L. (2009), "Conference on International Justice and Darfur", *Yale Law School*, 6 de febrero de 2009, www.icc-cpi.int/NR/rdonlyres/F04CB063-1C1E-463E-B8FB-5ECE076FB1E0/279792/090206_ProsecutorskeynoteaddressinYale.pdf, (consultado el 29 de abril de 2013).

Documentos, fuentes normativas y jurisprudenciales

Asamblea General de las Naciones Unidas (1946), "Confirmación de los principios de Derecho Internacional reconocidos por el estatuto del Tribunal de Nuremberg", Resolución 95 (I), de 11 de diciembre de 1946.

Asamblea General de las Naciones Unidas (2012), "Informe del Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos sobre el derecho de los pueblos a la paz", Documento de las Naciones Unidas: A/HRC/20/31, de 16 de abril de 2012.

Comisión de Derecho internacional (1950), "Principios de Derecho Internacional reconocidos por el Estatuto y por las sentencias del Tribunal de Nuremberg", *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, 1950.

Comisión de Derecho internacional (1951), "Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad", *Yearbook of the International Law Commission* 1951, vol. II.

Comisión de Derecho internacional (1954), "Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad", *Yearbook of the International Law Commission* 1954, vol. II.

Comisión de Derecho internacional (1996), "Proyecto de Código de Crímenes contra la Paz y Seguridad de la Humanidad", *Anuario de la Comisión de Derecho Internacional*, vol. II, segunda parte, 1996.

Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (2005), "Conjunto de principios actualizado para la protección y la promoción de los derechos humanos mediante la lucha contra la impunidad", Documento de las Naciones Unidas: E/CN.4/2005/102/Add.1, de 8 de febrero de 2005.

Comisión Interamericana de Derechos Humanos (1985-1986), *Informe Anual*, OAS Doc., OEA/Ser.L/V/II.68 doc. 8 rev. 1.

Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (2004), "El Estado de Derecho y la justicia de transición en las sociedades que sufren o han sufrido

conflictos. Informe del Secretario General”, Documento de las Naciones Unidas: S/2004/616, 3 de agosto de 2004.

Convenio para la Prevención y Sanción del Delito de Genocidio, adoptada en Nueva York el 9 de diciembre de 1948, en *BOE* de 8 de febrero de 1969.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros v. Perú)*, 14.03.2001, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 75.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Gelman vs. Uruguay, Fondo y Reparaciones*, 24.02.2011, Serie C: Resoluciones y Sentencias, N°. 221.

Corte Interamericana de Derechos Humanos, *Masacres de El Mozote y lugares aledaño vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas*, 25.10.2012, Serie C: Resoluciones y Sentencias, N°. 252.

Declaración de Santiago sobre el Derecho Humano a la Paz, de 10 de diciembre de 2010, disponible en <http://www.aedidh.org/sites/default/files/DS%20pdf%2024%20marzo%2011.pdf> (consultado el 29 de abril de 2013).

Diario de Sesiones del Congreso de los Diputados, Año 2006, VIII Legislatura, Número 222, Sesión plenaria núm. 206, celebrada el jueves, 14 de diciembre de 2006.

Estatuto de la Corte Penal Internacional, adoptado en Roma el 17 de julio de 1998, en *BOE* de 27 de mayo de 2002.

Oswiecim Declaration on the Human Right to Peace, 16 de Mayo de 2013.

Tribunal Primero de Sentencia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Medio Ambiente, Guatemala, Sentencia C-01076-2011-0015 OF.2°, de 10 de mayo de 2013.

Tribunal Supremo, sentencia N° 101/2012, de 27 de febrero de 2012.

Voto concurrente del Juez Diego García Sayán en el *caso Masacres de El Mozote y lugares aledaño vs. El Salvador, Fondo, Reparaciones y Costas*, 25.10.2012, Serie C: Resoluciones y Sentencias, N°. 252.

Voto razonado del Juez A. A. Cançado Trindade en el *caso Barrios Altos (Chumbipuma Aguirre y otros v. Perú)*, 14.03.2001, en Serie C: Resoluciones y Sentencias, No. 75.

